

Procesos de paz

- ❑ La situación en el Norte de Malí mejoró sensiblemente con el acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno y los grupos armados árabes y tuaregs.
- ❑ La liberación de dos de los representantes del ONLF por parte de Etiopía puede contribuir a desbloquear el proceso de paz.
- ❑ A pesar de la fragilidad de la situación, se produjeron avances importantes en el proceso de paz en RCA.
- ❑ Se firmó un acuerdo de paz en N'Djamena entre una facción del grupo rebelde darfurí SLM-MM y el Gobierno de Sudán.
- ❑ Se amplió el grupo de mediación en el conflicto de Sudán del Sur a nuevos países y organismos internacionales, en lo que se bautizó como la "IGAD Plus".
- ❑ En Libia, a finales del trimestre las autoridades con base en Trípoli y en Tobruk aceptaron, en principio, la última propuesta de acuerdo presentada por el enviado especial de la ONU.
- ❑ Se confirma la negociación entre los talibán y el Gobierno afgano, respaldada por un elevado número de países de la región.
- ❑ En el sur de Filipinas se inició el proceso de desarme del MILF.
- ❑ En Myanmar no se logró la firma del acuerdo de alto el fuego con la insurgencia y el proceso atravesó serias dificultades.
- ❑ Se reanudó en mayo el proceso formal de negociaciones sobre Chipre y los líderes de ambas comunidades pusieron en marcha diversas medidas de confianza.
- ❑ El diálogo entre Turquía y el PKK quedó inactivo en el periodo preelectoral.

En este apartado se analizan aquellos conflictos armados o conflictos no resueltos que han entrado en una fase de negociación formal, que están explorando el inicio de unas negociaciones o que las han roto o congelado por algún motivo durante el segundo trimestre de 2015.

3.1. Evolución de los procesos de paz

Tabla 3.1. Evolución de las negociaciones en el segundo trimestre de 2015			
Bien (5)	Con dificultades (16)	Mal (13)	En exploración (1)
Colombia (FARC) Chipre India (ULFA) RCA Malí	Etiopía (Ogadén) Libia Marruecos-Sáhara Occid. Afganistán (talibán) Filipinas (MILF) India (NSCN-IM) India-Pakistán Tailandia (sur) Myanmar Moldova (Transnistria) RDC (M23) Serbia-Kosovo Georgia (Abjasia) Georgia (Osetia del Sur) Sudán (Darfur) Madagascar	Armenia-Azerbaiján (Nagorno-Karabaj) Burundi Filipinas (NDF) Filipinas (MNLF) Israel-Palestina Siria Sudán Sudán (SPLM-N) Sudán del Sur (SPLA-I0) Turquía (PKK) Ucrania Yemen Senegal (Casamance)	Colombia (ELN)

(En la tabla sólo figuran los casos de los que posee información durante el trimestre. En cursiva se señalan los conflictos no resueltos y que no están en fase de lucha armada o que en estos momentos no son catalogables como “conflicto armado”. En la tabla de “exploración” sólo figuran los procesos que inician esa fase por primera vez o después de un largo período de tiempo sin diálogos o acercamientos).

De las 35 negociaciones e iniciativas de paz analizadas, 21 corresponden a conflictos armados y 14 a conflictos no armados o situaciones de tensión. Algunas de ellas tienen lugar en el marco de un mismo conflicto armado, aunque se tratan de negociaciones de paz diferentes. 16 han sufrido dificultades, 13 más han ido mal y cinco se han desarrollado satisfactoriamente. En un caso se han producido exploraciones y contactos preliminares de cara a establecer un futuro proceso de paz.

África

a) África Austral

En Madagascar, el Gobierno anunció el fin de arresto domiciliario del ex presidente Ravalomanana como parte del proceso de reconciliación y paz. El presidente malgache, Henry Rajaonarimampianina, hizo el anuncio como parte de las medidas incluidas en el proceso de paz abierto en el país. La medida fue comunicada tras una reunión de la mesa de reconciliación nacional patrocinada por las iglesias cristianas malgaches (Malagasy Christian Council of Churches (FFKM)). El ex presidente Ravalomanana fue detenido en octubre de 2014, unos días después de regresar al país desde su destitución en el golpe de Estado de 2009. Su detención derivó en disturbios y protestas, así como en una crisis política que aún perdura en el país. Rajaonarimampianina hizo el anuncio después de informar que Ravalomanana había reconocido la legitimidad del actual Gobierno. La reconciliación nacional es uno de los puntos principales de la mediación de la organización SADC, grupo regional al que pertenece esta nación insular.

b) África Occidental

El trimestre comenzó en Malí con el proceso de paz encallado, ya que la Coordinadora de Movimientos de Azawad (CMA), principal coalición rebelde de oposición al Gobierno en la zona norte, seguía rechazando los términos del llamado Acuerdo de Argel, debido a que éste seguía sin reconocer a la región de Azawad como entidad política, legal y territorial propia. Sin embargo, y tras diferentes esfuerzos de mediación encabezados por Argelia y por Mongi Hamdi, representante especial del secretario general de la ONU para Malí y jefe de MINUSMA, el 15 de mayo se logró el primer Acuerdo de Paz y Reconciliación Nacional en Bamako, capital de Malí, siendo respaldado por los representantes del Gobierno de Malí, los movimientos político-militares del norte que participan en la coalición Plataforma y el equipo de mediación internacional que encabeza Argelia, así como por dos grupos miembros de la CMA (la Coordinadora para los Pueblos de Azawad (CPA) y la Coordinación de los Movimientos Patrióticos de Resistencia y Frentes (CM-FPR)). Mongi Hamdi señaló al respecto de la ausencia de la CMA en el respaldo del acuerdo, la importancia vital para la paz, de que la coalición rebelde ratificase y se adhiciese al pacto con el fin de consolidar el proceso de paz y reconciliación. Las negociaciones prosiguieron y la CMA se comprometió a seguir participando en el diálogo, llegando a principios de junio a un primer acuerdo en materia de alto el fuego y de garantías políticas con el Gobierno de Malí, que allanaba el camino hacia la adhesión al Acuerdo de Paz y Reconciliación Nacional. Posteriormente, y luego de un proceso de consultas internas, donde la CMA envió una delegación al campo de refugiados malienses de Mbera, en territorio mauritano, para explicar por qué se sumaría al acuerdo, el 20 de junio se logró la firma definitiva de la CMA. El acuerdo, que con la

inclusión de la CMA ha sido respaldado por todos los grupos rebeldes árabes y tuaregs, propone dotar de más competencias a la parte septentrional de Malí, la creación de una fuerza de seguridad regional y un plan de desarrollo, quedando aún pendiente el debate nacional sobre la identidad política de la región de Azawad. La adhesión de la CMA fue valorada por diferentes actores y mediadores en el proceso de paz, como un gran paso hacia la consolidación de la paz y la estabilidad en el norte de Malí, a la par que países como Turquía, Francia, Reino Unido o EEUU, resaltaron la importancia del papel de mediación realizada por Argelia. Tres días después de la firma, Mongi Hamdi viajó a Nueva York para tratar de lograr el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU con el fin de ampliar el mandato de la MINUSMA en el país, el cual concluía el 30 de junio. El Consejo de Seguridad, en la reunión mantenida el 29 de junio, aprobó por unanimidad extender el mandato por un año, hasta junio de 2016, con un límite máximo de tropas autorizado de 11.240 efectivos militares, en donde se incluyeron por primera vez, y a petición del Gobierno de Francia, al menos 40 observadores militares para vigilar y supervisar el alto el fuego acordado recientemente en el país. El Consejo congratuló a las partes por el acuerdo de paz alcanzado, calificándolo como una "oportunidad histórica" para lograr la paz en Malí, a la vez que condenó las violaciones producidas al cese al fuego pactado, amenazando a las partes con implementar sanciones. El Consejo urgió al Gobierno de Malí, a la Plataforma y a la CMA a respetar el Acuerdo de Paz y Reconciliación, así como a preservar el acuerdo de alto el fuego pactado el 23 de mayo de 2014, el acuerdo de cese de hostilidades del 5 de junio de 2015, y las declaraciones de cese de hostilidades firmadas el 19 de febrero de 2015 y el 24 de julio de 2014. Cabe resaltar que el **Acuerdo de Paz y Reconciliación Nacional constituye un gran paso hacia la paz y estabilidad de la región de Azawad, pero no significa el fin de la violencia en el país, ya que diferentes grupos armados de corte yihadista que operan en la zona, como son AQMI, Ansar Dine, MUYAO o Mourabitoun, quedaron fuera de las negociaciones y continuaron llevando a cabo operaciones armadas.**

En **Senegal (Casamance)** el MFDC (Movimiento de Fuerzas Democráticas de la Casamance) se dirigió al presidente Macky Sall para demandar un retorno duradero de la paz en la región y denunció los interlocutores que el Estado ha escogido así como la ausencia de una hoja de ruta clara en las negociaciones. Abdoulayé Baldé, alcalde de Zinguichor, cuestionó la necesidad de nombrar al embajador de EEUU dentro del proceso de paz. Cabe recordar que el embajador de EEUU en Senegal, Mark Boulware, tiene como encargo alentar y ayudar a los diferentes actores a perseguir las negociaciones de paz. En un comunicado hecho por la embajada estadounidense, se aclaró que el embajador, que ostenta el rol de Consejero especial para Casamance, había sido reintegrado recientemente en el seno de la embajada tras la finalización de su misión en noviembre, pero que en ningún caso fungiría como mediador en el proceso. Por otra parte, varios centenares de mujeres provenientes de diferentes organizaciones de mujeres de Guinea-Bissau y de Casamance organizaron una marcha para reclamar una paz definitiva en Casamance, donde emitieron un memorándum al presidente de la Asamblea Nacional para reclamar la participación activa de las mujeres en las negociaciones de paz. **La Plataforma de Mujeres para la Paz en Casamance** reiteró su deseo de participar en la reconstrucción de la región y denunciaron nuevamente las violaciones hechas a mujeres desde que se iniciara el conflicto. La Plataforma demandó al Estado y al MDFO una declaración de perdón y pidieron que se incluyera dentro de los acuerdos de paz el reconocimiento de la violencia sufrida por las mujeres de la región. Además, aprovecharon para pedir al Estado que procediese lo más rápido posible a intervenir en la reconstrucción de los pueblos, campos y vías de acceso destruidas por el conflicto.

c) Cuerno de África

En lo concerniente a los contactos entre el **Gobierno etíope y el ONLF** que tuvieron lugar en el primer trimestre, no se ha tenido constancia de nuevos encuentros. El 10 de febrero se produjo el

primer encuentro entre el ONLF y el Gobierno etíope en Nairobi desde que se interrumpieron las conversaciones de paz en octubre de 2012. Representando a Etiopía se encontraba el ministro de Defensa, Siraj Fergassa, y el jefe de los servicios de inteligencia del país, Getachew Assefa. Por la parte del ONLF, se encontraba el jefe de Relaciones Exteriores del ONLF, Abdirrahman Mahdi, y el secretario del ONLF, Mohamed Abdi Yasin. Ambas partes se pusieron de acuerdo en la mayoría de los principios para establecer el diálogo. Desde entonces, no se ha tenido constancia de la celebración de la tercera ronda de contactos, aunque circularon algunos rumores en relación al proceso de paz. Uno de los actores que representa uno de los principales escollos en el proceso de paz, el presidente de la región de Ogadén, Abdi Mohamud Omar, realizó un llamamiento al ONLF a aceptar de forma incondicional la Constitución del país como requisito para el inicio del proceso de paz. Diversos analistas señalan al presidente de la región y algunos generales como los principales obstáculos para la paz en Ogadén. Circularon rumores en marzo según los cuales el primer ministro Hailemariam Desalegn habría solicitado la influencia del presidente turco, Recep Tayib Erdogan, para mediar en el contencioso. Erdogan visitó Etiopía en febrero y comprometió importantes inversiones en el país. Recientemente Etiopía y Djibouti firmaron un acuerdo en torno a la construcción de un gasoducto que comunicará Ogadén, región rica en hidrocarburos, y el puerto de Djibouti.

Además, a principios de junio el ONLF informó en un comunicado de prensa de la liberación el 1 de junio de dos representantes del ONLF, Sulub Ahmed y Ali Hussein, en la localidad fronteriza de Moyale, que habían sido secuestrados en enero de 2014 en Nairobi por parte del Gobierno etíope y trasladados a Etiopía. El Gobierno etíope liberó, según las fuentes independentistas, a ambos delegados tras numerosos esfuerzos diplomáticos llevados a cabo por parte del Gobierno de Kenya y miembros de la comunidad internacional. El ONLF celebró su liberación y el retorno de ambos delegados a Nairobi como un paso positivo que puede contribuir a desbloquear el avance de las conversaciones de paz. Por otra parte, el grupo armado rechazó a finales de junio las acusaciones sobre la posible detención en Asmara de miembros de la insurgencia discolos con el liderazgo del ONLF. Khalid Omar, en declaraciones a BBC, señaló que su arresto junto a otros compañeros del ONLF se debía a que habían planteado la cuestión sobre la renovación del liderazgo del grupo, y su liberación se había producido, según él, por la intercesión de Asmara. La BBC contactó por teléfono a uno de los portavoces del ONLF con base en Australia, Abdikader Adani Hirmoge, que rechazó la acusación y la calificó de no tener ninguna base, y ratificó que el comité central del ONLF es el único que puede decidir cómo y dónde se producirá un cambio o relevo en la cúpula del grupo. Destacó también que el grupo tiene seis líderes desde su fundación en 1984 y que la organización es una de las más democráticas del continente. El portavoz afirmó que el proceso de paz entre el ONLF y Etiopía estaba en marcha y que la tercera ronda negociadora se encuentra a la espera de acordar una fecha. Finalmente, el portavoz señaló que Khalid y otros habían sido expulsados del grupo armado por no cumplir sus obligaciones en la insurgencia.

d) Grandes Lagos y África Central

La situación en **Burundi** se deterioró gravemente durante el trimestre, lo que desencadenó una importante actividad diplomática para evitar que la situación degenerara en un nuevo conflicto armado. La comunidad internacional, encabezada por los esfuerzos mediadores de la ONU, apoyada por la UA y por las organizaciones regionales EAC y CIRGL intentó mediar entre el Gobierno de Burundi y la oposición política, y la UE y Bélgica presionaron para que se retrasaran las elecciones hasta conseguir un clima político y social propicio. No obstante, el presidente no cedió a las demandas de no presentarse a un tercer mandato a pesar de las grandes movilizaciones y disturbios y en mayo, y para agravar la situación, se produjo un golpe de Estado que fue desarticulado. Días después del intento frustrado del golpe de Estado la oposición reinició el diálogo con el Gobierno, promovido por la misión de la ONU en el país (BNUB) para intentar

estabilizar la situación, pero la muerte del líder opositor Zedi Feruzi, del pequeño partido UPD, provocó la suspensión del diálogo por parte de la Coordinadora anti tercer mandato. Aunque la EAC consiguió a principios de junio que Nkurunziza pospusiera la celebración de las elecciones parlamentarias hasta el 29 de junio tras celebrar una cumbre extraordinaria, el presidente Pierre Nkurunziza rechazó las presiones y a pesar de los esfuerzos de la ONU y la para que no se presentara a un tercer mandato, y finalmente las elecciones parlamentarias se celebraron el 29 de junio. La ONU sustituyó a su mediador oficial, el enviado especial del secretario general de la ONU para la región de los Grandes Lagos, Saïd Djinnit, que fue recusado por la oposición política al juzgarlo parcial en el proceso, y que dimitió el 11 de junio. El 23 de junio llegó a Bujumbura el nuevo mediador, el senegalés Abdoulaye Bathily, representante del secretario general de la ONU en África Central. Entre el 11 de junio y el 22 el diálogo estuvo totalmente congelado como consecuencia del principal escollo todavía presente: la candidatura del presidente Pierre Nkurunziza para un tercer mandato en las elecciones. El Gobierno, que no quería participar en la nueva ronda de negociaciones, finalmente anunció el 24 de junio que se sumaría a la nueva ronda de diálogo promovida por la ONU junto a los representantes de la oposición, Agathon Rwaswa y Charles Nditije, al representante de la sociedad civil y defensor de los derechos humanos, Pierre-Claver Mbonimpa, y a los líderes de las diferentes religiones.

Durante el trimestre se produjeron avances en el proceso de paz en **RCA**. El **5 de abril** se alcanzó un acuerdo entre los ex presidentes **François Bozizé** y **Michel Djotodia** para promover la reconciliación en el país. Posteriormente, se celebró con éxito el **Foro para la Reconciliación Nacional entre el 4 y el 11 de mayo en Bangui**, que reunió a alrededor de 700 representantes y líderes de diversos grupos y actores de la sociedad civil centroafricana que alcanzaron un histórico acuerdo de paz conocido como **Pacto Republicano para la paz, la reconciliación nacional y la reconstrucción del país**. Entre los presentes estaba el Gobierno de transición, los diversos partidos políticos, los principales grupos armados del país (miembros de la antigua Séléka y las diferentes milicias anti balaka), la patronal, representantes de la sociedad civil, líderes comunitarios y grupos religiosos, que intentaron definir cuál debería ser el futuro del país. Se celebraron diferentes reuniones y comisiones temáticas sobre los principales elementos de la agenda de construcción de paz del país, entre los que destaca el ámbito de la paz y la seguridad, la justicia y la reconciliación, el desarrollo económico y social, y la gobernabilidad. Los principales resultados y recomendaciones adoptadas durante el Foro fueron: 1) la firma de un nuevo acuerdo de cese de hostilidades y desarme entre 10 facciones de Séléka y las milicias anti balaka, que establece la integración de sus miembros en los cuerpos de seguridad a los miembros que no hayan cometido crímenes de guerra o ser beneficiarios de proyectos de desarrollo comunitario 2) la liberación de los menores soldados, ya que se estima que entre 6.000 y 10.000 menores forman parte de los grupos rebeldes, y el libre acceso del personal humanitario, programas de apoyo a la población desplazada y refugiada; 3) un calendario electoral, la extensión del actual mandato de Catherine Samba-Panza y el aplazamiento de las elecciones, que no era ninguna sorpresa ante los requisitos que todavía estaban pendientes; la reforma de la Constitución (y un referéndum posterior) y del código de nacionalidad, que permita a la población musulmana convertirse en ciudadana del país; 4) el establecimiento de comisiones locales y nacionales de justicia y reconciliación; y 5) una agenda de prioridades para el desarrollo económico y social del país, la revitalización del sector agrícola (distribución de insumos agrícolas), ganadero (para permitir el retorno de las cabañas ganaderas al país) y minero (negociar el levantamiento de las sanciones a la explotación y comercio de diamantes a través del Proceso de Kimberley. El Centro para el Diálogo Humanitario estuvo llevando a cabo tareas de apoyo técnico y asesoría al proceso de reconciliación nacional desde 2014. Cabe señalar que desde 1980 se han celebrado cinco debates nacionales de reconciliación, que no han evitado el reinicio de la inestabilidad, los dos últimos en 2003 y 2008. A pesar del éxito de la convocatoria y los resultados, los retos y dificultades existentes son inmensos y se puso de manifiesto al culminar el Foro cuando diversos representantes de Séléka y de las anti balaka expresaron su

rechazo en torno a algunas recomendaciones y abandonaron el Foro durante la ceremonia de clausura, y entre 200 y 300 partidarios de ambos grupos rebeldes llevaron a cabo protestas y disparos en los alrededores del Foro para manifestar su frustración ante el hecho de que muchos de sus compañeros se encontraban bajo arresto domiciliario o se enfrentaban a juicios por crímenes cometidos durante el conflicto. La financiación de los principales proyectos (menores y DDR), así como la capacidad de los líderes de controlar a sus guerrilleros fueron los principales retos planteados. Cabe destacar, no obstante, que las milicias anti balaka y Séléka liberaron a 300 menores como parte del compromiso alcanzado en el Foro de Bangui. Se estima que entre 6.000 y 10.000 menores forman parte de los grupos armados en el país, y en 2014 UNICEF garantizó la liberación de 2.800 menores, cifra superior a los 500 menores liberados en 2013.

En lo concerniente a las diferentes iniciativas de paz y desarme en **RDC**, el Gobierno congolés anunció que espera resolver el dossier del grupo armado M23, cuyos miembros todavía se encuentran refugiados en Uganda y Rwanda, antes del próximo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU en septiembre. Con el objetivo de acelerar la repatriación de los excombatientes restantes del M23, la CIRGL decidió, en una cumbre extraordinaria celebrada el 18 de mayo en Luanda, establecer un mecanismo integrado por la RDC, Rwanda, Uganda, la UA, la CIRGL, la SADC y la ONU. El Gobierno afirmó haber dado cumplimiento a los compromisos vinculados a la Declaración de Nairobi firmada en diciembre de 2013, tras haber derrotado militarmente al M23, con la puesta en marcha del programa de DDR y la presentación del proyecto de ley de amnistía de los miembros del M23. No obstante, en enero de 2015 el coordinador de la puesta en marcha de la Declaración de Nairobi por parte del M23, René Abandi, dimitió de su cargo tras acusar a Kinshasa de no respetar los acuerdos. Por otra parte, el enviado especial del secretario general de la ONU para la región de los Grandes Lagos, Saïd Djinnit, visitó Kisangani donde se encuentra el campo de desmovilización del grupo armado rwandés FDLR para animar a los ex combatientes a retornar a su país de origen, Rwanda, y revisar las condiciones del campo de tránsito. Existe una iniciativa en curso que tiene el objetivo de buscar países de asilo para los miembros de las FDLR que no quieran retornar voluntariamente a Rwanda.

El proceso de paz en **Sudán del Sur**, entre el Gobierno de Salva Kiir y el grupo rebelde opositor SPLM-IO, encabezado por el ex vicepresidente Riek Machar, prosiguió en las lógicas de las dinámicas anteriores, con avances en la firma de acuerdos pero con muchas incógnitas sobre su cumplimiento real. La falta de acuerdos efectivos, tras meses de mediación de la IGAD, y la persistencia del conflicto en Sudán del Sur, que ha desatado una fuerte crisis humanitaria, llevaron a la IGAD a anunciar el 11 de marzo la ampliación del mecanismo de mediación a otros actores, como la UA, y en concreto a cinco estados miembros (Nigeria, Rwanda, Sudáfrica, Chad y Argelia) que se incorporarían a la mediación, así como representantes de EEUU, Reino Unido y Noruega (quienes conforman la Sudan Troika)¹, y que no cuenta con el beneplácito del Gobierno de Salva Kiir. También las Naciones Unidas, la UE y China, han pasado a jugar un papel más activo, ampliándose los actores de la negociación a lo que se ha llamado la "**IGAD plus**", donde el papel de los mediadores ya no sólo es regional, sino multilateral. El 29 de mayo, el presidente de Kenya, Uhuru Kenyatta, anunció que tanto el **proceso de paz bajo mediación de la IGAD como el proceso de reconciliación y reunificación del SPLM**, se fusionarían en el mismo proceso de mediación para lograr una mejor coordinación y resultados. En lo referente al proceso de reunificación del SPLM, durante el mes de enero ya se habían dado pasos importantes al respecto. El 21 de enero, las distintas facciones que integran el SPLM (Gobierno, SPLM-IO y la facción del SPLM conocida como SPLM 7), habían alcanzado un acuerdo de reunificación en

¹ EEUU, Reino Unido y Noruega forman la conocida como Sudan Troika, grupo de Gobiernos que apoyaron las negociaciones de paz entre Sudán y Sudán del Sur que condujeron al Acuerdo Global de Paz (Comprehensive Peace Agreement, CPA) de 2005.

Tanzania, con la facilitación de los presidentes tanzano y keniano, con el objetivo de reconciliar a las tres facciones y facilitar las conversaciones de paz a nivel nacional (Arusha Declaration: The Draft Agreement on the Reunification of the SPLM Factions). Como parte de los avances de reunificación, a principios de junio, una delegación de cinco miembros del llamado SPLM 7, visitó Sudán del Sur acompañados de una delegación del grupo de mediación. Los avances en el proceso de reunificación del SPLM fueron más tangibles aún, con la reincorporación de Pagan Amum como secretario general del SPLM el 23 de junio, quien formaba parte del grupo SPLM 7 y que había sido removido del cargo por Salva Kiir como consecuencia del inicio de los enfrentamientos armados en diciembre de 2013. Por otro lado, y en lo que respecta a las negociaciones para la formación de un Gobierno de transición en el país, ambas partes habían avanzado en ello, firmando un acuerdo el pasado 2 de febrero, el "South Sudan Parties Sign Areas of Agreement on the Establishment of the Transitional Government of National Unity (TGoNU)", donde se comprometían, entre otros aspectos, al establecimiento de instituciones de justicia transicional y a la firma de un acuerdo de paz definitivo y completo a más tardar el 5 de marzo de 2015, fecha que no se cumplió. Durante los días 8 y 10 de junio, enviados especiales de la IGAD realizaron consultas con las partes sudanesas implicadas en el conflicto, y les presentaron una propuesta para retomar en las próximas rondas de negociación, que según Seyoum Mesfin, ex ministro de Exteriores de Etiopía y jefe del proceso de mediación de la IGAD, se reanudarán a mediados de julio. La propuesta, según adelantó Seyoum, plantea el establecimiento de un gobierno de transición de unidad nacional durante 30 meses, con la vicepresidencia asignada a los rebeldes y con un periodo de 18 meses de integración de las fuerzas rebeldes del SPLM-IO en las Fuerzas Armadas del país. Al respecto, los rebeldes proponían mantener las fuerzas separadas durante todo el periodo de transición de tres años, mientras que el gobierno había insistido en un máximo de seis meses. En la propuesta también se propone establecer una comisión de la verdad y reconciliación durante el periodo de transición, así como un tribunal "híbrido" con participación de la ONU y la UA.

Por otro lado, durante el trimestre las presiones externas se fueron acrecentando con el paso de los acontecimientos, la persistencia del conflicto y el impacto humanitario. Diferentes actores y organismos internacionales, entre los que destacan los países miembros de la Troika, la UE e incluso la UA, solicitaron la aplicación de sanciones dirigidas a los líderes de las partes enfrentadas, en concreto a seis altos mandos militares, tres por cada parte, así como la implementación de un embargo de armas, que obligue a las partes a avanzar en los acuerdos de paz. En esta línea, el Consejo de Paz y Seguridad de la UA (AUPSC) solicitó en mayo de 2015 al Comité de Sanciones de la ONU medidas urgentes para detener la violencia, pero éstas no han sido aplicadas debido a la falta de acuerdo en este aspecto. La IGAD afirmó que no estaba interesada en promover la inclusión de posibles medidas sancionadoras, ya que ello podría convertirse en un obstáculo más para el logro de la paz.

Durante el mes de mayo, el SPLM-IO y las autoridades de Gambella (Etiopía), firmaron un acuerdo de paz fronterizo. La tensión existente entre las comunidades fronterizas del condado de Akobo en Sudán del Sur y del condado de Tergol en Etiopía, debido al robo sistemático de ganado y a la violencia (violaciones, secuestros de menores, asesinatos) perpetrada por los asaltos de la comunidad murle, parece haber sido resuelta con la firma de un acuerdo de pacificación transfronterizo entre las autoridades correspondientes. El acuerdo, respaldado por las autoridades del SPLM-IO de Akobo, así como por las de Tergol, fue ratificado durante la conferencia de Gambella (Etiopía), y en él se inscriben acciones relacionadas con el control de aspectos transfronterizos, el uso de los recursos comunes y el impulso al comercio, destacando entre sus puntos: control de la caza furtiva con patrullas conjuntas en los parques nacionales; uso compartido pacíficamente de las áreas de pastoreo y pesca; uso de redes estándares de pesca; y promoción del comercio entre ambas partes. La conferencia contó con la presencia, por parte etíope, de los ministros de Información y Justicia del estado de Gambella, Chuol Chany Kier y

Thomas Tut Puk respectivamente, así como del comisionado del condado de Tergol, D.Simon Dol; y por parte de Sudán del Sur, los asistentes incluyeron al comisionado del condado oriental de Akobo, Tut Chot Rial, junto con otros seis funcionarios del condado y miembros del Comité de Paz de los nuer.

En relación a los diferentes conflictos presentes en Sudán, el 27 de marzo se firmó un acuerdo de paz en la capital chadiana N'Djamena entre una facción del grupo rebelde darfurí **Movimiento para la Liberación de Sudán-Minni Minawi (SLM-MM)**, encabezada por el comandante **Mohamedain Ismail Bashar** con el **Gobierno sudanés**. El grupo, que cuenta con cerca de 400 combatientes, se había escindido del SLM-MM el 7 de octubre de 2014, debido a acusaciones vertidas contra el líder de la organización por nepotismo, corrupción y detención ilegal de algunos de sus líderes, y había sido acusado por Minnawi de traición. El acuerdo, según informaciones publicadas en prensa, fue firmado por el jefe de la oficina de paz de Darfur, Amin Hassan Omer, y por el líder de la facción Ismail Bashar, y contó con la presencia del ministro de Exteriores chadiano, Moussa al-Faki, quien representó al presidente chadiano Idris Débi, uno de los facilitadores del acuerdo. Los detalles del acuerdo no se han dado a conocer, pero éste se enmarca dentro de los acuerdos de seguridad del Documento de Doha para la Paz en Darfur (DDPD).

Por otro lado, los tres principales grupos rebeldes de Darfur anunciaron un acuerdo donde se comprometían a impulsar sus esfuerzos para proteger los derechos de los menores y adherirse a las normas internacionales vigentes. De esta forma, las organizaciones **Movimiento de Justicia e Igualdad (JEM)**, el **Movimiento de Liberación de Sudán** dirigido por Abdel Wahid El Nur (SLM-AW) y el **SLM** bajo el mando de Minni Minawi (SLM-MM), ratificaron su compromiso de proteger los derechos de los menores, en una reunión consultiva mantenida los días 27 y 28 de mayo en Stadtschlaining, Austria, en el Centro Austriaco de Estudios para la Paz y la Resolución de Conflictos. Los firmantes declararon que la protección de los menores en Darfur era una prioridad para la sociedad y que este acuerdo no podía esperar al restablecimiento de las negociaciones de paz del Comité de Dialogo Nacional con el Gobierno de al-Bashir, proceso, cuya última reunión se celebró el 10 de mayo, quedando interrumpido debido al calendario electoral, y que se prevé restaurar próximamente.

Durante el trimestre, también se dio a conocer el **proceso de acercamiento y reconciliación entre Musa Hilal, ex líder Janjaweed y jefe del Consejo del Despertar Revolucionario (RAC) y el Gobierno sudanés**. Hilal, quien asistió el 30 de mayo a la ceremonia de toma de posesión del presidente Omar al-Bashir, avanzó que iniciaría conversaciones con el Gobierno para lograr la paz en Darfur, las cuales incluirían el registro del RAC como partido político, así como medidas de seguridad, reconciliación y reformas políticas en Darfur. Hilal, fungió como líder janjaweed en Darfur, operando bajo el mando del gobierno de Sudán contra las fuerzas rebeldes, lealtad que le valió para que al-Bashir le ofreciera en el 2008 el puesto de asistente presidencial de Asuntos Federales. Sin embargo, con posterioridad se había distanciado del gobierno, formando en el 2014 el grupo RAC, que según diferentes fuentes, había firmado en julio de 2014 un acuerdo con el SPLM-N, con el objeto de derrocar al régimen sudanés y establecer un sistema democrático en el país.

El proceso de paz en Sudán, también destacó por la presencia de diferentes grupos opositores en el **Parlamento Europeo para asistir a una reunión de trabajo sobre Sudán**. El Parlamento Europeo organizó una reunión sobre la situación de Sudán el 9 de junio en Estrasburgo, a la cual invitó a diferentes representantes del país, entre los que destacan representantes del SPLM-N, del National Umma Party, de la coalición de partidos de oposición National Consensus Force, de la Civil Society Initiative, así como de otros movimientos rebeldes aliados en el Sudan Revolutionary Front (SRF). Mubarak Ardol, portavoz de la delegación de negociación del SPLM-

N confirmó la presencia de la organización en la reunión, además de asistir a la reunión anual sobre Sudán que se realizará en Alemania a finales de junio. La reunión se enmarcó dentro de la gira por Europa en la que se encuentran diferentes líderes del SPLM-N, con el objeto de denunciar la situación humanitaria que padecen las regiones del Kordofán Sur y Nilo Azul.

Finalmente, durante el mes de febrero de 2015, los gobiernos de al-Bashir (Sudán) y de Yoweri Museveni (Uganda), llegaron a un acuerdo para formar un "mecanismo de seguridad conjunto", con el objeto de comprometerse a reducir el apoyo de cada gobierno a los grupos rebeldes que residen en sus países, como los son el LRA en Sudán y la dirección del SRF, con sede en Uganda, el cual incluye al JEM, lo cual puede tener implicaciones también en el conflicto sur sudanés y en la resolución del mismo.

e) Magreb

En cuanto a Libia, en abril, y tras una cuarta ronda de contactos celebrada en Argelia y Marruecos, el enviado especial de la ONU, Bernardino León, presentó un nuevo plan para intentar conseguir una salida política al conflicto en el país. Sin embargo, tanto el parlamento con base en Trípoli como el con sede en Tobruk presentaron objeciones a la propuesta. Paralelamente, algunos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU insistieron en la necesidad de imponer sanciones a determinados actores libios por considerar que sus acciones torpedeaban los intentos de diálogo. Sin embargo, no prosperaron –por el bloqueo de Rusia y China– los intentos de algunos miembros del Consejo (Reino Unido, EEUU y España) por sancionar a algunos actores libios (Abderrahman Swelhi y Othman Mlegta, vinculados al Congreso General Nacional de Trípoli y a la Casa de Representantes de Tobruk, respectivamente) acusados de obstruir los intentos de reconciliación.

En junio, León presentó un nuevo borrador de acuerdo (el cuarto desde el inicio de las gestiones diplomáticas a comienzos de año) que define un esquema de transición hasta la adopción de una nueva Constitución. Sectores de línea dura de Trípoli y Tobruk cuestionaron la iniciativa, que tuvo una mejor acogida entre las autoridades de la capital libia. Finalmente, el parlamento de Tobruk también aceptó en principio la propuesta, aunque planteó que sería necesario introducir enmiendas. Representantes de ambas partes se sentaron por primera vez en la misma mesa durante una reunión celebrada en Skhirat (Marruecos) a finales de junio, un hecho que fue considerado relevante de cara a la posible conformación de un gobierno de unidad. Según el plan, que recoge 29 principios y casi 70 artículos, debería conformarse un gobierno de acuerdo nacional que operaría durante un año. La Casa de Representantes actuaría como poder legislativo y se crearía además un Consejo de Estado integrado por 120 personas, 90 de las cuales procederían del parlamento basado en Trípoli. La propuesta también aborda otros aspectos como las condiciones para un cese el fuego, el desarme de los grupos armados y el repliegue de las milicias de las ciudades. Según diversas fuentes, a finales del trimestre persistían las diferencias entre representantes de Trípoli y Tobruk sobre varios aspectos relevantes del plan, incluyendo las competencias del Consejo, la legitimidad de la Casa de Representantes y la definición de la autoridad competente sobre las fuerzas armadas, entre otros temas.

Cabe destacar que en paralelo a los esfuerzos por avanzar en el diálogo con las autoridades de Tobruk y Trípoli continuaron llevándose a cabo otra serie de iniciativas destinadas a facilitar la solución política de la crisis. Entre otras, el foro de diálogo de mujeres libias (en Túnez, en abril), reuniones de líderes tribales (en El Cairo, en mayo), de líderes y activistas políticos (en Argel, en junio), entre representantes libios y diplomáticos de diversos países en el marco del Diálogo Político de Libia (en Berlín, en junio), y la ronda de consultas de países vecinos de Libia (en N'Djamena, en junio). El Consejo de Seguridad de la ONU también valoró algunas iniciativas,

incluyendo de la sociedad civil, que han facilitado la puesta en marcha de ceses el fuego locales e intercambios de prisioneros.

En cuanto a la cuestión del **Sáhara Occidental**, a principios de abril el secretario general de la ONU presentó un nuevo informe que cubre el período entre abril de 2014 y abril de 2015. En el documento, el alto funcionario plantea los reparos expuestos por Marruecos tanto al anterior informe como a la aproximación a las negociaciones, que bloquearon el proceso durante varios meses durante 2014. Ban Ki-moon detalla que tras una conversación con el rey de Marruecos en enero de 2015 se llegó un acuerdo sobre el camino a seguir y el monarca dio su visto bueno tanto al retorno del enviado personal para el Sáhara, Christopher Ross, como para el despliegue de la nueva jefa de la MINURSO, Kim Balduc. En este contexto, el informe detalla las gestiones realizadas por Ross incluyeron dos rondas de viajes a la zona, una entre el 11 y el 23 de febrero de 2015 y otra entre el 22 y 29 de marzo.

Durante su primer periplo, Ross mantuvo reuniones en Rabat, Rabouni, Mouakchott y Argel y exhortó a todas las partes a negociar sin condiciones, a ir más allá de sus respectivas propuestas y a explorar fórmulas innovadoras. En Marruecos, las autoridades insistieron en que el plan presentado por Rabat en 2007 debía ser la base de la negociación y que el Estado marroquí y el Frente POLISARIO no debían ser tratados como iguales. En sus reuniones con el Frente POLISARIO, en tanto, dirigentes de la organización expresaron a Ross su insatisfacción por la ausencia de progresos en las negociaciones y por el hecho de que el secretario general de la ONU hubiera dado garantías a Marruecos sin consultarles. Durante la visita a Argelia los altos funcionarios de ese país transmitieron un mensaje similar, criticando a la ONU por exceso en sus prerrogativas al dar “seguridades unilaterales y contraproducentes” a Marruecos sin haber hecho consultas al Consejo de Seguridad o al Frente POLISARIO. Durante su segundo viaje a la zona en marzo Ross visitó las mismas ciudades y constató que el retorno a las conversaciones entre las partes era prematuro, por lo que se mantendría el programa de consultas bilaterales y diplomacia itinerante. En el marco de estas gestiones, Ross también visitó a los países del Grupo de Amigos del Sáhara Occidental y mantuvo reuniones en Madrid, París, Londres, Moscú y Washington. Finalmente, cabe destacar que tras la publicación del informe del secretario general de la ONU, a finales de abril el Consejo de Seguridad renovó el mandato de la MINURSO por un año más. Como en años anteriores, a finales de junio el tema del Sáhara también volvió a ser objeto de análisis en el marco de la comisión de descolonización de la ONU.

América

A mediados de abril, y en relación a la aplicación de la justicia, el máximo jefe de las FARC, “**Timoleón Jiménez**”, manifestó en un comunicado que “nuestra posición ha sido la de reconocer en todo momento parte de la responsabilidad que nos quepa en las violencias que envuelven la dinámica de la guerra a muerte, lo que no significa que nos arrepintamos de nuestro alzamiento. Pero el Estado, el conjunto del Establecimiento, también debe asumir con franqueza las suyas [...] Porque se trata de una salida concertada [...] Una solución de índole política que necesariamente requerirá un derecho que se adapte a ella [...] Carece de lógica pretender que la dirigencia insurgente resulte condenada como culpable única, y que además se someta a penas que la excluirán de la política a futuro”. El mismo día de ese comunicado, sin embargo, un comando de las FARC realizó un ataque nocturno sobre una guarnición de militares localizada en un municipio del Departamento del Cauca, en el que murieron 11 militares. Las FARC se vieron obligadas a dar por terminado el alto el fuego unilateral, y el conflicto se reavivó con numerosos ataques entre las dos partes, que hicieron aumentar significativamente el número de víctimas mortales en las semanas siguientes. A finales de abril, las FARC aseguraron que el **Movimiento Bolivariano** sería la plataforma política con la cual esperan estar activas en la vida pública al

terminar el proceso de paz. Las FARC también solicitaron la “inmediata aplicación” del acuerdo parcial sobre drogas ilícitas alcanzado en el año anterior. Se supo también que el Gobierno colombiano facilitó que el máximo líder del ELN, “Gabino”, se encontrara en Cuba con el líder de las FARC, “Timochenko”, con el propósito de ayudar al ELN a iniciar una negociación con el Gobierno. En otro orden de cosas, el Gobierno nombró como nuevo ministro de Defensa a Luis Carlos Villegas, hasta entonces presidente de la patronal Andi, y que en 2013 había participado en las negociaciones de La Habana. Al empezar la ronda 37, el 20 de mayo, el Gobierno nombró a la cancillera María Ángela Holguín y el empresario Gonzalo Restrepo, presidente de Bancolombia, como miembros de su equipo negociador. En paralelo, se aprobó el decreto que permitía el inicio del plan piloto para el desminado humanitario y limpieza del territorio de artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar, acordado por Gobierno y FARC el 7 de marzo.

El 4 de junio, en el comunicado conjunto nº 53, las dos delegaciones hicieron público que habían alcanzado un acuerdo para poner en marcha, una vez firmado el Acuerdo Final, una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial. La Comisión trabajará durante un período de tres años, y estará integrada por 11 personas, tres de las cuales podrán ser extranjeras. Seis personas serán designadas por el Gobierno y las FARC. A mediados de mes, las FARC anunciaron que dejarían ir a los menores de 15 años que encontraran en sus filas. En febrero, las FARC ya anunciaron que dejarían de incorporar en sus filas a menores de 17 años.

Asia y Pacífico

a) Asia Meridional

Lo más significativo desde la llegada al poder del presidente Ashraf Ghani, ha sido el cambio en la política de Afganistán hacia Pakistán y la implicación del resto de vecinos y otros aliados para garantizar la paz en el país, especialmente una vez se retire el último contingente militar (EEUU mantiene unos 9.800 soldados hasta finales de 2015, a la que seguirá una misión no combatiente de apoyo de la OTAN hasta finales de 2016). La política de mano tendida de Ghani hacia Pakistán, ha hecho posible el acercamiento. El presidente afgano estaba convencido de que los militares pakistaníes tenían la clave para involucrar a los talibán en el diálogo. En este trimestre, el proceso de negociaciones entre el gobierno afgano y los talibán se ha materializado de forma progresiva, con la ayuda y coordinación de un buen número de partes: EEUU, Pakistán, China, Irán, Qatar o Noruega. El gobierno de Ghani comenzó realizando consultas con los vecinos (19-20 abril visita a Irán, 28-29 abril a la India, o la visita del primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif a Kabul el 12 de mayo). El 21 de abril, en una visita de estado a Pakistán, el presidente chino Xi Jinping animaba a Islamabad a tomar el papel de mediador en el proceso de paz entre Afganistán y los talibán. EEUU por su parte, hacía una visita a Asia Central para recabar apoyos para el diálogo con Afganistán. Igualmente, Ghani ha sabido hacer declaraciones conciliadores en las que afirmaba que los talibán tenían un espacio en la política afgana (justo antes de las negociaciones de Qatar). El 2 y 3 de mayo, Qatar acogió una delegación talibán de ocho miembros liderada por Sher Mohammad Abbas Stanekzai y un grupo variopinto de personas ligadas a varios partidos y grupos de Afganistán, desde miembros de la sociedad civil, en especial, del Alto Consejo de Paz (HPC), incluidas algunas mujeres, a miembros de la Misión de Ayuda de Naciones Unidas para Afganistán (UNAMA). El encuentro se organizó por Pugwash, en cuyo informe se asegura que cada cual acudió en calidad individual, y no en representación de ningún gobierno o institución. Entre los puntos abordados en este primer encuentro, hubo unanimidad en la necesidad de paz para Afganistán. Todos acordaron necesaria la retirada de las tropas

extranjeras. Entre otras demandas, los talibán reclamaron la desaparición de sus miembros de la lista negra de Naciones Unidas, que el gobierno afgano fuera un gobierno islámico, la reforma de la constitución y que se reabriera la oficina talibán en Doha. En junio, el recién nombrado ministro de Defensa, Masoom Stanekzai en calidad de enviado de paz del gobierno afgano se reunió en Urumqui (Xinjiang, China) con una delegación talibán (Mullah Khalil, Mullah Abudl Razaq y Mullah Hassan Rahmani). El 3 y 4 de junio, una delegación de mujeres afganas (Fawzai Kofi y Shukria Barekzai, parlamentarias y Hawa Alam Nuristani, del HPC) se encontró con varios miembros de los talibán en Noruega. Una de las dudas a la hora de negociar con los talibán es si su implicación en la política afgana supondrá un retroceso en los tímidos avances que se han producido en la participación de las afganas en la vida pública. El 7 de junio, una delegación de los talibán se reunía con parlamentarios y otros políticos afganos en Dubai, una vez más, organizado por Pugwash. El 15 de junio, el encuentro se realizaba en Noruega entre otra delegación talibán (3 miembros) y varios representantes del gobierno afgano, con Mohammad Mohaqeq (equipo de Abdullah Abdullah) a la cabeza del grupo. Todos estos encuentros fueron el precedente al albergado el 7 de julio en Murree, Pakistán, entre el gobierno afgano y los talibán (con EEUU y China como observadores invitados). Las bases sentadas auguran un futuro de más encuentros y acuerdos entre las muchas partes implicadas en sacar adelante este proceso de paz.

En el estado indio de **Nagalandia** no se produjeron avances significativos en el proceso de paz entre el Gobierno de la India y el grupo armado de oposición naga NSCN(IM), aunque ambas partes reiteraron su compromiso con el proceso a pesar de la ruptura del acuerdo de alto el fuego entre el NSCN(K) y el Gobierno. A finales del mes de junio el Gobierno señaló que se esperara que se produjeran avances importantes en un plazo breve de tiempo.

En el estado indio de **Assam** se produjo una primera ronda de conversaciones entre el Gobierno indio y la facción favorable a las negociaciones del grupo armado de oposición ULFA. La reunión, que tuvo un carácter tripartito y contó con la participación de representantes del Gobierno central indio, el Gobierno del estado y el ULFA, fue calificada de positiva. Por parte del ULFA asistieron su presidente Arabinda Rajkhowa y otros miembros de la cúpula como Pradip Gogoi, Raju Baruah, Shasha Choudhury, Chitraban Hazarika, Pranati Deka, Mithinga Daimary y Prabal Neog. El Gobierno estuvo representado por el interlocutor principal PC Halder y otros altos cargos tanto del Gobierno central como del estatal. La delegación del ULFA destacó que se abordaron todos los temas principales y que sus reivindicaciones centrales fueron la concesión de la categoría de Scheduled Tribes para seis comunidades y por tanto espacios reservados en la Asamblea Estatal a partir de esta clasificación y en otros organismos legislativos. Además, se hizo un llamamiento a una mayor descentralización de poderes tanto estatales como locales para favorecer el empoderamiento de la población. En paralelo a estas negociaciones, el Gobierno central señaló que Paresh Baruah, líder del ULFA(I), facción contraria a las negociaciones, no estaba interesado en iniciar un diálogo con el Gobierno. Estas declaraciones fueron contestadas por Baruah señalando que siempre estaban dispuestos a un diálogo honorable y significativo, pero que el Gobierno sólo quería imponer sus propias condiciones a la insurgencia.

b) Sudeste asiático

En el sur de Filipinas hubo avances positivos en el proceso de paz, como el inicio de desarme del MILF y la acreditación de un partido político impulsado por el grupo armado, pero a la vez se registraron importantes retrasos y desencuentros en la tramitación parlamentaria de la Bangsamoro Basic Law (que recientemente cambió su nombre a Basic Law of the Bangsamoro Autonomous Region), piedra angular del proceso de paz. En el mes de abril se reanudaron las deliberaciones en la Cámara de Representantes, tras el impasse que provocó un enfrentamiento armado en el mes de enero en el que 44 policías murieron. A finales de mayo, el comité de dicha

cámara que se encarga de la tramitación de la ley la aprobó, incluyendo una cláusula que permite la ampliación de la nueva entidad política Bangsamoro a través de un plebiscito en aquellas regiones que lo soliciten. Sin embargo, a principios de junio la Cámara de Representantes ignoró la fecha límite prevista para la aprobación de la ley (11 de junio) y la pospuso hasta el mes de septiembre. En paralelo, durante el trimestre el Senado puso objeciones a la aprobación del texto por considerar que algunos de sus preceptos implicaban una reforma constitucional, y en consecuencia acordó la eliminación de la mencionada cláusula. En varias ocasiones durante el proceso de deliberación en Mindanao se produjeron manifestaciones a favor de la aprobación del texto, mientras que el Gobierno instó a los parlamentarios escépticos con el borrador de ley a que lo acaben apoyando. Los mencionados retrasos podrían complicar el calendario de implementación del acuerdo de paz, originalmente prevista para coincidir con el fin del mandato presidencial de Benigno Aquino a mediados de 2016. Por otra parte, la Philippine Constitution Association presentó una instancia ante la Corte Suprema para que declare inconstitucionales tanto el Acuerdo Marco sobre Bangsamoro, firmado en octubre de 2013, como el Acuerdo Global sobre Bangsamoro, firmado en marzo de 2014, por considerar que violan claramente algunos de los principales preceptos de la Carta Magna, que incluyen concesiones que sobrepasan las competencias del presidente y que los paneles negociadores del Gobierno acordaron forzar la reforma de la Constitución para acomodar los contenidos de ambos acuerdos. El Gobierno declaró estar dispuesto a cumplir con cualquier requerimiento por parte de la Corte Suprema y manifestó que le parecía sospechoso el momento de presentación de la instancia, tanto tiempo después de la aprobación de ambos textos.

En clave positiva, cabe destacar que a finales de mayo el United Bangsamoro Justice Party, creado por el MILF, presentó una solicitud de acreditación ante las autoridades electorales competentes de cara facilitar su participación en las elecciones previstas en 2016 en la región de Bangsamoro. El jefe negociador del MILF y a la vez presidente de la Bangsamoro Transition Commission, Mohaqer Iqbal, declaró que la intención del MILF es convertirse en una organización humanitaria que promueva la implementación de algunos de los contenidos de tipo socio-económicos contenidos en el acuerdo de paz del 2014. El gobernador de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán, así como otros destacados líderes políticos, declararon que la acreditación del UBJP como partido político sería un gran paso adelante en el proceso de paz. Por otra parte, a mediados de junio se inició el proceso de desarme del MILF con la entrega de unos 75 armas, incluyendo morteros y lanzacohetes, y la desmovilización de unos 145 combatientes. Aunque hasta el momento el MILF no ha revelado de cuántos combatientes y armas dispone, el Gobierno estima que tiene como mínimo 10.000 combatientes. Tanto Benigno Aquino como el líder del MILF, Murad Ebrahim, destacaron el simbolismo del acto más allá de la cantidad de entregas y su importancia para la creación de confianza entre las partes y los progresos en la implementación del acuerdo de paz. También en este sentido se expresaron los máximos responsables de los paneles negociadores y de los organismos creados para supervisar la implementación del acuerdo de paz, como el Third Party Monitoring Team o la Independent Decommissioning Body. Finalmente, cabe destacar las dos reuniones que durante el trimestre celebró el Foro de Coordinación Bangsamoro, que permitió el intercambio y acercamiento de posturas con el MNLF; la exposición sobre el estado actual del proceso de paz por parte del líder del MILF, Ebrahim Murad, durante el 42º Consejo de Ministros de Exteriores de la OCI que se celebró a finales de mayo en Kuwait, así como el apoyo de varias facciones del MNLF a la Basic Law of the Bangsamoro Autonomous Region, aunque condicionada a la versión que finalmente apruebe el Congreso. (NOTA MNLF)

En cuanto al MNLF, a pesar de que su fundador, Nur Misuari, permanece en paradero desconocido, durante el trimestre se produjeron varias gestiones diplomáticas por parte de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) que propiciaron un acercamiento entre el MILF y el MNLF y la posibilidad de reanudar las conversaciones tripartitas entre el Gobierno filipino,

el MNLF y la OCI acerca de la plena implementación del acuerdo de paz de 1996, interrumpidas desde hace varios meses. A finales de abril, el actual secretario general de la OCI, Iyad Ameen Mandani, visitó Mindanao y presidió una reunión del Foro de Coordinación Bangsamoro, el organismo creado por la OCI para acercar posiciones entre el MILF y el MNLF y para armonizar los contenidos de los acuerdos de paz que el Gobierno de Filipinas firmó en 1996 con el MNLF y en 2014 con el MILF. En esta reunión, a la que asistieron 12 representantes de cada organización, se acordó el establecimiento de un secretariado permanente (con tres miembros de cada organización) con sede en Cotobato que será apoyado técnicamente y económicamente por la OCI. En octubre de 2014 se habían pactado los Términos de Referencia de este organismo. Durante su visita, la primera por parte de un secretario general de la OCI, Iyad Ameen Mandani también se reunió con miembros del Gobierno y del Parlamento, expresó su apoyo al actual proceso de paz entre el Gobierno y el MILF y pidió explícitamente al comité que se encarga de la tramitación parlamentaria de la Basic Law of the Bangsamoro Autonomous Region que incluyera en sus deliberaciones al MNLF, demanda que fue acogida satisfactoriamente por el presidente de dicho comité. De hecho, a mediados de mayo el líder de una de las facciones del MNLF, Datuy Abul Kahyr Alonto, participó en una de estas audiencias y expresó su apoyo a la aprobación por parte del Parlamento de la Basic Law of the Bangsamoro Autonomous Region. Sin embargo, Alonto también señaló que el actual borrador incluye un bajo porcentaje de las provisiones del Comprehensive Agreement on Bangsamoro y a la vez esbozó varias opciones para que Mindanao obtuviera su independencia.

La OCI también invitó a miembros del Foro de Coordinación Bangsamoro al 42º Consejo de Ministros de Exteriores de la OCI que se celebró a finales de mayo en Kuwait, en el que el líder del MILF, Ebrahim Murad, hizo un discurso sobre el estado actual del proceso de paz. Previamente, algunos sectores del MNLF habían expresado su oposición a la presencia de Murad en la reunión al considerar que el MILF no tiene el estatus de miembro observador (como sí lo tiene el MNLF), pero la OCI señaló que las personas que asistieron a la reunión lo hicieron en calidad de miembros del Foro de Coordinación Bangsamoro, que aprovecharon la ocasión para celebrar un nuevo encuentro con el enviado especial de la OCI para el sur de Filipinas, Sayed El-Masry, en presencia de un representante de la OPAPP. Tras el mismo, el líder de la facción mayoritaria del MNLF, Muslimin Sema, declaró que la OCI habría mostrado su acuerdo para reanudar las conversaciones tripartitas para la plena implementación del acuerdo de paz de 1996. De igual modo, Sema declaró que su facción apoyará la Basic Law of the Bangsamoro Autonomous Region siempre y cuando suponga un avance respecto de la actual Región Autónoma del Mindanao Musulmán. El líder de otra facción, Alonto, también expresó su apoyo a la mencionada ley y pidió paciencia al pueblo moro hasta conocer la versión definitiva de la misma.

En cuanto al proceso entre el Gobierno y el NDF, durante el trimestre no se reanudaron conversaciones exploratorias o formales, pero en varias ocasiones ambas partes mostraron su disposición al diálogo. A principios de abril, el Gobierno recibió un informe por parte de un equipo de negociación informal liderado por el antiguo ministro de Agricultura, Hernani Braganza, que habría estado llevando a cabo contactos exploratorios con el NDF de cara a una posible reanudación de las conversaciones de paz. En diciembre de 2014 trascendieron dichos contactos, que fueron confirmados también por el líder y fundador del NPA, Jose Maria Sison. Sison declaró a la prensa que en febrero de 2015 hizo una propuesta de abordar los tres temas sustantivos de la agenda negociadora (reformas económicas y sociales; reformas políticas y constitucionales; fin del conflicto y redistribución de fuerzas) en un periodo de 18 meses, seis para cada punto. Según fuentes cercanas al Gobierno, Manila consideró que no existía tiempo suficiente para lograr un acuerdo integral con el NDF antes del fin del mandato de Aquino a mediados del 2016, pero sí de lograr avances sustanciales en la agenda negociadora. Coincidiendo con la presentación de este informe, la Cámara de Representantes encargó a un comité especial que estudiara la posibilidad de reanudar las conversaciones de paz. Por su parte,

el jefe negociador del NDF, Luis Jalandoni, declaró desde Filipinas su disposición al diálogo y señaló que en los últimos meses había emprendido varias medidas de fomento de la confianza en esa dirección, como la liberación de algunos prisioneros de guerra. Pocos días después, a mediados de abril, el jefe de las Fuerzas Armadas declaró su apoyo a los intentos del Gobierno de reiniciar el diálogo con el NDF, pero a la vez llamó al NDF a negociar desde la sinceridad y al NPA a poner fin a algunas prácticas como la extorsión, las abducciones o los ataques con explosivos detonados a distancias. En el mismo sentido, la jefa de la Oficina Presidencial para los Procesos de Paz, Teresita Deles también instó al NPA a no hostigar a civiles, a proyectos de desarrollo o a soldados no armados que no estuvieran de servicio.

El clima para la reanudación del diálogo se enrareció desde finales de abril, cuando Jalandoni, todavía desde Filipinas, reiteró su disposición al diálogo siempre que el Gobierno liberara a 16 consultores del NDF que según él están cubiertos por el Acuerdo Conjuntos sobre Garantías de Seguridad e Inmunidad (JASIG, por sus siglas en inglés), así como a unos 200 prisioneros políticos, priorizando a aquellos más mayores, enfermos o que hubieran cumplido penas superiores a los cuatro años. A mediados de mayo, el presidente, Benigno Aquino, declaró públicamente su voluntad de reanudar el diálogo, pero instó al NDF a mostrar sinceridad en la negociación y acusó al grupo de hacer demandas imposibles de asumir por el Gobierno, en especial respecto de la liberación de consultores y prisioneros políticos. El NDF reaccionó declarando que Aquino estaba sabotando cualquier esfuerzo de reanudar las conversaciones, acusando a su Gobierno de violar varios de los acuerdos firmados hasta el momento y descartando cualquier posibilidad de firmar un acuerdo de cese de hostilidades si previamente el Gobierno no iniciaba reformas estructurales o se llegaban a acuerdos respecto de los algunos de los puntos de la agenda sustantiva. A principios de junio, Sison volvió a criticar duramente al Gobierno después de que Luis Jalandoni recibiera una citación judicial por su presunta responsabilidad en el secuestro y retención ilegal de cuatro policías en Mindanao en julio de 2014 y después de que fuera detenido uno de los máximos dirigentes del NPA, Adelberto Silva, que el NDF considera que está cubierto por el JASIG. A pesar de ello, Sison declaró que tanto él como Jalandoni han recomendado al Comité Nacional Ejecutivo del NDF la autorización para iniciar conversaciones exploratorias en Oslo y agradeció las tareas de facilitación que está llevando a cabo el Gobierno de Noruega. Por su parte, a finales de junio el portavoz del Gobierno declaró su disposición a explorar la reanudación de las conversaciones formales, aunque posteriormente un miembro del panel negociador matizó que ello solamente sería posible si el NDF abandonaba sus precondiciones.

Con respecto a las negociaciones de paz entre la insurgencia étnica y el Gobierno de Myanmar, cabe destacar que el trimestre concluyó sin que se lograra la firma definitiva del acuerdo de alto el fuego de alcance nacional que inicialmente estaba prevista para el mes de mayo. Las tensiones fueron constantes durante todo el trimestre fruto de la desconfianza entre las partes y de la persistencia de los enfrentamientos armados entre el Ejército y varios de los grupos insurgentes.² Tras una reunión en mayo por parte de los grupos armados de oposición étnicos durante tres días para abordar la firma del acuerdo, las insurgencias instaron al Gobierno a llevar a cabo reformas constitucionales y a cesar completamente las hostilidades en los territorios kachin, kokang, ta'ang y arakan. Los grupos armados señalaron que la violencia en estas zonas socavaba las posibilidades de alcanzar la paz en el país. El jefe negociador el Nationwide Ceasefire Coordination Team (NCCT, que agrupa a los grupos armados) reiteró el apoyo a los tres grupos armados con los que el Gobierno mantiene enfrentamientos, AA, MNDAA y TNLA, y señaló que no les dejarían atrás. Aunque los dos primeros forman parte del NCCT, el Gobierno de Myanmar rechaza reconocerlos como tales y en el caso del TNLA, sí forma parte del NCCT, pero no ha firmado un acuerdo de alto el fuego bilateral con el Gobierno. Tras esta reunión se anunció que

² Para más información véase el resumen de Myanmar en el capítulo 1 (Conflictos armados).

las insurgencias volverían a reunirse en junio, pero días antes del nuevo encuentro, los tres grupos armados protagonistas de los enfrentamientos con el Ejército anunciaron que se retiraban del NCCT, apuntando a la desconfianza en los negociadores gubernamentales y al hecho de que se sentían traicionados por el resto de grupos insurgentes. Esta retirada llevó al NCCT a señalar que no firmarían ningún acuerdo de alto el fuego si los grupos afectados por los enfrentamientos armados eran excluidos del acuerdo, afirmando que cualquier acuerdo carecería de sentido si quienes actualmente protagonizan la violencia no forman parte. El Gobierno mostró su preocupación por este anuncio y señaló que esperaba que el acuerdo pudiera firmarse finalmente antes de finalizar el año. Un nuevo equipo coordinador de las insurgencias deberá negociar con el Gobierno tanto la inclusión de los tres grupos armados excluidos como 15 enmiendas propuestas al texto final de acuerdo de alto el fuego, lo que podría dificultar cualquier avance en el proceso. El Gobierno, por su parte, mostró su preferencia a seguir negociando con el NCCT directamente como había hecho hasta ahora y no con el nuevo equipo coordinador.

En Tailandia, el Gobierno y las Fuerzas Armadas declararon en varias ocasiones durante el trimestre estar trabajando intensamente para la reanudación del diálogo con algunas organizaciones armadas que operan en el sur del país, pero finalmente ésta no se produjo. El Gobierno reconoció que se han llevado a cabo encuentros secretos entre ambas partes para construir confianza entre las partes y para acordar los aspectos procedimentales de la negociación. Aunque no han trascendido los nombres de las personas que representarán a las organizaciones insurgentes del sur del país, según varias fuentes las conversaciones serían entre el Gobierno y una plataforma, conocida como Majlis Syura Patani (MARA Patani, Consejo Consultivo de Patani), que agrupa a seis organizaciones insurgentes: el BRN, tres facciones distintas de PULO, el BIPP y el GMIP. El Gobierno de Malasia, que ejerce funciones de facilitación del diálogo, habría propiciado la creación de esta plataforma con el objetivo de acercar posiciones entre las distintas organizaciones insurgentes y así facilitar la interlocución con el Gobierno. Sin embargo, a pesar de los intentos para acercar posiciones entre las partes que se produjeron durante el trimestre, varios analistas expresaron su escepticismo sobre las probabilidades de éxito de las conversaciones de paz porque buena parte de la insurgencia considera que hay falta de sinceridad y voluntad política por parte del Gobierno y, en segundo lugar, porque Bangkok no habría sido capaz de convencer ni atraer a la mesa de negociación a los líderes insurgentes que tienen la capacidad de tomar decisiones políticas. En este sentido, según estas voces, MARA Patani no contaría con el apoyo del ala militar de BRN, la organización presuntamente responsable de la mayor parte de la violencia que ocurre en el sur de Tailandia. Del mismo modo, el Gobierno considera que MARA Patani no incluye a todos los actores relevantes para poner fin al conflicto armado ni necesariamente representa las demandas clave de la insurgencia. Fuentes cercanas a los contactos exploratorios entre las partes señalaron que a principios de junio se produjo un encuentro secreto en Kuala Lumpur entre ambas partes para tratar de lograr un cese de hostilidades durante el Ramadán o incluso durante el transcurso de unas eventuales negociaciones, pero finalmente no se llegó a ningún acuerdo. Finalmente, cabe destacar que a finales de junio un portavoz de la insurgencia declaró en una entrevista a un medio de comunicación que una buena señal de la voluntad política hacia el proceso negociador sería la liberación de un destacado líder insurgente tras la finalización del Ramadán. El último proceso negociador incluyó al Gobierno y al BRN y duró desde principios de 2013 hasta aproximadamente finales de 2013 o marzo de 2014 (según las fuentes), por lo que en el caso de lograrse sería la primera ronda de negociación bajo la actual junta militar. Finalmente, cabe destacar que a principios de junio el Gobierno anunció que 473 combatientes habrían aceptado una inmunidad temporal del Gobierno para que pudieran reunirse con sus familias durante el Ramadán, con su compromiso previo de no cometer actos de violencia.

Europa

a) Europa occidental, central y oriental

En relación al conflicto entre **Moldova y Transdniestria** por el estatus de ésta última, aumentó la tensión y las alarmas locales e internacionales sobre los riesgos de una deriva de confrontación entre Moldova y Rusia y de impactos de la crisis continental de Ucrania en Moldova y Transdniestria. Pese a las alertas, no hubo pasos significativos en el proceso negociador durante el trimestre. El presidente de turno de la OSCE y ministro de Exteriores serbio, Ivica Dacic, se reunió con el representante especial de la OSCE para la resolución del conflicto de Transdniestria, Radojko Bogojevic, en la capital serbia a finales de abril. Además, Bogojevic mantuvo consultas en junio con representantes ucranianos y rusos (partícipes del formato negociador 5+2) y realizó además un viaje a la región entre finales de junio y principios de julio, en el que se reunió por separado con representantes políticos y negociadores de Moldova y de Transdniestria. El representante especial instó al inicio de preparativos para una nueva ronda del formato 5+2 lo antes posible. También señaló que era esencial un diálogo periódico y constructivo entre las partes para hacer avanzar el proceso. La falta de intensidad del proceso contrastó con el deterioro del contexto geopolítico.³

El proceso de diálogo relativo a **Ucrania** afrontó numerosas dificultades durante el trimestre, tanto en el ámbito militar como político. Así, pese al acuerdo de Minsk II, que incluye un alto el fuego, se produjeron numerosas violaciones del mismo entre abril y junio. La misión de supervisión de la OSCE identificó también movimiento de armamento pesado, incumpliendo los términos de retirada de ese tipo de armas. El llamamiento de los ministros de Exteriores de Alemania, Francia, Rusia y Ucrania –tras las conversaciones mantenidas en Berlín el 13 de abril– a continuar con la retirada de armamento pesado y a incluir también armas por debajo de los 100mm de calibre, morteros, vehículos blindados y tanques no tuvieron impacto en el terreno. El propio Gobierno ucraniano afirmó en junio haber informado a la OSCE de su despliegue de armas pesadas para repeler ataques pro-rusos en Marynka. En ese encuentro del 13 de abril, calificado de intenso y con elementos de polémica entre los participantes, los mandatarios instaron también a la creación de cuatro grupos de trabajo sobre cuestiones militares y de seguridad, políticas, humanitarias y económicas, contemplados en el acuerdo de Minsk II. Tras conversaciones a puerta cerrada entre representantes ucranianos y de las fuerzas rebeldes, con participación de Rusia y de la OSCE, a comienzos de mayo, los grupos de trabajo se establecieron ese mismo mes, con un formato bajo el paraguas del Grupo Trilateral de Contacto (Ucrania, Rusia y OSCE y con participación de las fuerzas rebeldes), que mantendrá el poder de toma de decisiones. Los grupos están coordinados, respectivamente, por Ertugrul Apakan, Pierre Morel, Thomas Mirow y –de manera interina– por Heidi Tagliavini. Suiza anunció en junio que Tagliavini dejaría próximamente su cargo como representante especial de la presidencia de turno de la OSCE en Ucrania y en el Grupo Trilateral de Contacto.

En relación a los componentes políticos de la implementación del acuerdo de Minsk II hubo numerosos desencuentros. Las autoridades pro-rusas criticaron la legislación ucraniana sobre el estatus especial para las áreas rebeldes aprobada en marzo por el Parlamento ucraniano alegando que tergiversaba el acuerdo de Minsk II al supeditar su puesta en marcha a la celebración de elecciones locales que respeten la legislación ucraniana y bajo supervisión internacional. También criticaron no haber sido invitados a participar en la comisión ucraniana sobre reforma de la constitución y acusaron al Gobierno ucraniano de falta de voluntad de diálogo, mientras Kiev señaló que hasta la celebración de elecciones legales en el Donbás no

³ Véase el resumen sobre Moldova (Transdniestria) en el capítulo 2 (Tensiones).

negociaría con los actores de la región. El presidente se mostró contrario a una opción de federalizar Ucrania y afirmó que seguirían con el plan de descentralización. Los líderes rebeldes presentaron igualmente el 12 de mayo sus propuestas de enmiendas a la Constitución ucraniana, enviándolas al Parlamento ucraniano y al Grupo de Contacto. Algunos analistas señalaron que sus planteamientos sobrepasaban lo contemplado en el acuerdo de Minsk II. Ese mismo mes hubo nuevas conversaciones entre EEUU y Rusia, durante la visita del secretario de Estado, John Kerry, a Moscú, donde mantuvo reuniones con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y con el presidente ruso, Vladimir Putin. La canciller alemana, Angela Merkel, se reunió también con Putin en Moscú, en una visita el 10 de mayo con motivo de una celebración de la II Guerra Mundial y tras el boicot occidental, incluido de Alemania, a un desfile militar el día anterior. Ucrania reforzó en junio su posición, afirmando que no era posible celebrar elecciones bajo supervisión internacional en el Donbás hasta que el país recupere el control fronterizo y las tropas rusas se retiren, mientras Rusia siguió negando su participación en el conflicto e instó a Ucrania a cumplir con el acuerdo de Minsk II. Por otra parte, Rusia abrió un canal diplomático bilateral con EEUU para abordar la crisis ucraniana, que se suma a los espacios de diálogo bajo el paraguas del Grupo Trilateral de Contacto y del formato de Normandía (Alemania, Francia, Ucrania y Rusia). Asimismo, en junio volvió a escalar la retórica de confrontación, en un contexto de deterioro del contexto geoestratégico.

b) Sudeste de Europa

En relación al conflicto de **Chipre**, se reanudó en mayo el proceso formal de negociaciones sobre la reunificación de la isla, tras ocho meses paralizado, a causa entre otros factores de los desacuerdos sobre las actividades unilaterales de exploración de reservas de hidrocarburos en el Mediterráneo. A comienzos de abril, el asesor especial del secretario general de la ONU sobre Chipre, Espen Barth Eide, señaló que se daban las condiciones para el reinicio del diálogo y subrayó la necesidad de trabajar en línea con la Declaración Conjunta de febrero de 2014. La reanudación del diálogo se produjo en mayo, en un contexto de renovado optimismo local e internacional y con un nuevo líder turcochipriota, Mustafa Akinci, elegido nuevo presidente en segunda ronda en los comicios turcochipriotas de abril y que se comprometió con el proceso de diálogo –Akinci había sido también impulsor de proyectos de colaboración entre las dos comunidades en su etapa como alcalde de la parte turca de Nicosia entre 1976 y 1990. Precedidas por reuniones por separado el 5 de mayo y una cena conjunta el 11 de mayo, las partes mantuvieron una primera reunión conjunta el 15 de mayo, que marcó el reinicio formal del proceso. Los líderes acordaron reunirse al menos dos veces al mes así como la puesta en marcha de medidas de confianza. Entre éstas, la eliminación del requerimiento de visado para cruzar la isla entró en vigor tan solo un día después, el 16 de mayo. En línea con la voluntad de los líderes políticos de hacer avanzar el proceso, sus equipos negociadores se reunieron cinco veces en las dos semanas siguientes. El asesor especial del secretario general de la ONU anunció a finales de mayo una batería de cinco compromisos adoptados por las partes: trabajos para la apertura de nuevos puntos de cruce, empezando por Lefka-Aplici y Deryneia; medidas prácticas para avanzar hacia la interconexión de la red eléctrica; inicio de discusiones y propuestas para la interoperabilidad de la telefonía móvil; prevención de interferencias radiofónicas; y establecimiento de un comité sobre igualdad de género. Además, Barth Eide anunció el calendario de reuniones conjuntas de los máximos líderes: 17 de junio, 29 de junio, 10 de julio y 27 de julio.

En la reunión conjunta del 17 de junio, los líderes grecochipriota y turcochipriota formularon el mandato para el comité de género y designaron a sus participantes. Según prensa local, las personas integrantes son: Xenia Loizidou, Soula Zavou, Mary Papadopoulou, Soula Hadjikyriacou, Helen Apegitou, Harris Chrysostom, Maria Hadjipavlou, Olga Demetriou y Nicolas Kyriacou. Pese a la creación del comité, organizaciones como el European Women's

Lobby señaló después de la reunión negociadora del 17 de junio que las negociaciones carecían claramente de perspectiva de género y que no había habido en el proceso hasta ahora participación adecuada de mujeres. Esta plataforma instó a una participación del 50% de mujeres en el equipo negociador y en todos los comités técnicos y grupos de trabajo y a una aplicación sistemática de la perspectiva de género. Por otra parte, tras el encuentro de los líderes del 17 de junio, el asesor especial de la ONU señaló que tras la evaluación inicial de la situación, los líderes estaban entrando en negociaciones sustantivas sobre temas no resueltos. La última sesión conjunta del trimestre, la del 29 de junio, también abordó cuestiones relativas a propiedad, gobernanza y criterios territoriales. Según Barth Eide, el clima fue pragmático y constructivo. El diplomático noruego se mostró muy optimista sobre la situación de las negociaciones y alabó la aproximación de los líderes de ambas comunidades y de sus equipos negociadores. A principios de junio, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, también mostró su apoyo a Anastasiades y Akinci.

El proceso de diálogo entre **Serbia y Kosovo** afrontó dificultades durante el trimestre. Si bien en la ronda negociadora del 21 de abril en Bruselas, bajo facilitación de la UE, los primeros ministros de Serbia y Kosovo, Aleksandar Vucic e Isa Mustafa, acordaron paralizar las privatizaciones de compañías en áreas serbias de Kosovo –desbloqueando así el boicót de los representantes serbios de Kosovo en el Parlamento–, a mitad de mayo la ministra para el Diálogo de Kosovo, Edita Tahiri, afirmó que no habría más reuniones al nivel de primeros ministros hasta que se avanzara en la implementación de los acuerdos previos o hasta que las partes alcanzaran estadios similares, si bien los grupos de trabajo continuarían reuniéndose. En relación a la implementación, un informe preparado por BIRN Kosovo, Internews Kosova y el Center for Transparency, Research and Accountability –de Belgrado– señaló que de los 17 acuerdos alcanzados entre Serbia y Kosovo desde el inicio del diálogo en 2011 solo cuatro se han implementado plenamente. Las reuniones de los grupos de trabajo en mayo se centraron en cuestiones como aspectos del acuerdo de gestión de frontera integrada, la posible apertura de dos nuevos puntos de cruce entre Serbia y Kosovo y cuestiones de seguros de vehículos, según Tahiri. Por otra parte, trascendió durante el trimestre que el presidente de Serbia, Tomislav Nikolic preparaba una “plataforma” sobre Kosovo, a modo de documento político sobre la región. Según informaciones en prensa serbia, el documento ofrece a Kosovo el estatus de provincia dentro de Serbia. El primer ministro serbio, Aleksandar Vucic, afirmó que habría que esperar a que el texto fuera hecho público y compartido con la opinión pública, sectores profesionales, intelectuales y políticos, y señaló que habrá que plantearse cómo de realista es. Por otra parte, el primer ministro serbio también afirmó que Serbia estaba siendo chantajeada internacionalmente con Kosovo, alegando que pese a se había avanzado en las reformas pro-europeas y la supervisión de éstas la UE aún no había abierto ningún capítulo de negociación de las conversaciones de adhesión como país candidato. Según Serbia, diversos países de la UE esperan ver resueltas diversas cuestiones entre Serbia y Kosovo antes de abrir las negociaciones de integración.

El proceso de diálogo entre Serbia y Kosovo asistió a una nueva ronda al nivel de primeros ministros a finales de junio en Bruselas, facilitada por la líder de Exteriores de la UE Federica Mogherini. Según Mogherini, las partes lograron progreso en lo relativo a la futura creación de una Asociación de Municipalidades Serbias de Kosovo y en cuestiones de telecomunicaciones. También discutieron sobre energía y sobre libertad de movimiento entre las zonas serbia y albanesa de la ciudad dividida de Mitrovica. No obstante, no se alcanzó acuerdos. Según fuentes serbias, no se firmó ningún acuerdo porque la delegación albanesa quería alcanzar un pacto único sobre las cuatro cuestiones y no acuerdos separados. En todo caso, según Tahiri sí había consenso sobre las telecomunicaciones, aunque no trasladó a un acuerdo escrito. La cuestión de la Asociación de Municipalidades Serbias continuó generando desacuerdos. Serbia plantea que esta nueva administración debería tener poderes ejecutivos, mientras Kosovo se opondría a ese nivel de competencias, según medios locales.

El proceso de diálogo entre **Turquía y el PKK** quedó prácticamente inactivo durante el trimestre, en un contexto preelectoral de grave tensión política, escalada de la retórica de confrontación y de incidentes de seguridad. A finales de marzo el KCK –sistema de organización que aglutina a los diversos actores del movimiento kurdo, incluyendo las guerrillas del PKK– había enunciado como condiciones para dejar la lucha armada el inicio de negociaciones con Öcalan sobre la base de los 10 artículos planteados en la llamada Declaración de Dolmabahçe de febrero, la creación de un comité local de supervisión del proceso, la creación de una comisión de la verdad bajo el paraguas parlamentario y un proceso negociador que lleve a una nueva Constitución democratizadora. Además, el KCK distinguió entre deponer las armas y paralizar la actividad armada, señalando que en el contexto actual bélico de Oriente Medio la primera opción implicaría el fallecimiento de población kurda. Así, el movimiento kurdo reclamó en abril al Gobierno y al Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que reevaluase el rumbo del proceso de paz. Erdogan afirmó en varias ocasiones entre finales de marzo y abril que el Gobierno no daría más pasos hacia la paz si el PKK no deponía las armas, negó que fuera a establecerse un comité local de supervisión y negó que existiera una cuestión kurda. Erdogan, el Gobierno y prensa pro-AKP habían generado expectativas y lanzado el mensaje en febrero de que Öcalan iba a ordenar al PKK a dejar las armas, si bien en su comunicado de marzo Öcalan instó al PKK a un congreso sobre el fin de la actividad armada si había acuerdo sobre principios básicos. Así, aumentó la retórica de confrontación entre las partes y el nuevo distanciamiento de Turquía con respecto al proceso de diálogo generó amplios recelos en el movimiento kurdo, que también criticó la falta de referencias a la cuestión kurda en el manifiesto electoral del AKP y en el documento de hoja de ruta política del partido gobernante AKP “Contrato para una Nueva Turquía 2023”.

Tras las visitas de la delegación kurda a Öcalan *del 18 de marzo y 5 de abril*, el Gobierno no volvió a autorizar nueva visita hasta finales de mayo, tras la cual el parlamentario del HDP y miembro de la delegación visitante *Sirri Süreyya Önder no facilitó detalles pero señaló que el AKP habría intentado* y fracasado en su intento de frenar a través de Öcalan las buenas perspectivas electorales del HDP. El KCK informó en mayo de que había puesto fin a los preparativos para un posible congreso en el que poner fin a su actividad armada en Turquía y responsabilizó al AKP de ello –por las acciones del Ejército contra el PKK, la negación de Turquía de que haya partes en conflicto involucradas en el diálogo como interlocutores, o las declaraciones de negación de la existencia de la cuestión kurda, entre otros elementos. El KCK dejó abierta la puerta a que la convocatoria del congreso pudiese reactivarse si el AKP diera pasos, incluyendo respuesta a sus condiciones previas (comité local observador, comisión de memoria histórica en el Parlamento y proceso negociador que lleve a una nueva constitución democratizadora). También señaló que el aislamiento de Öcalan infringía una línea roja del movimiento kurdo.

Tras las elecciones del 7 de junio, en que el HDP consolidó su posición tras superar la barrera histórica del 10% de votos (obtuvo 13,12% de votos y 80 escaños) y en que el AKP perdió la mayoría absoluta aunque siguió siendo el partido más votado (40,87% y 258 escaños de los 550), el movimiento kurdo hizo un llamamiento a la reanudación del diálogo, paralizado en los meses anteriores. Tanto la delegación kurda participe del proceso como el co-líder del HDP, Selahattin Demirtas, solicitaron autorización para nuevas visitas a Öcalan, el reinicio del diálogo y el impulso a cuestiones que estaban sobre la mesa, como el establecimiento del comité local de supervisión.

c) Cáucaso

En relación al diálogo de paz entre **Armenia y Azerbaiyán** en torno a **Nagorno-Karabaj**, se iniciaron los preparativos para una posible reunión entre los presidentes de Armenia y Azerbaiyán

que puede tener lugar a finales de año. Así, los co-presidentes del Grupo de Minsk de la OSCE se reunieron en París por separado con los ministros de Exteriores de Armenia y Azerbaiyán, Edward Nalbandia, y Elmar Mammadyarov el 30 de junio. Los mandatarios acordaron reunirse conjuntamente más adelante con los co-presidentes del órgano mediador para preparar la agenda de la futura cumbre presidencial. El *Grupo de Minsk de la OSCE subrayó la necesidad de intensificar el diálogo y de seguir con los preparativos para el futuro encuentro presidencial. Por otra parte, el presidente de turno de la OSCE y ministro de Exteriores de Serbia, Ivica Dačić llevó a cabo visitas a Armenia y a Azerbaiyán en junio.* En relación a la participación de las mujeres en el diálogo de paz, mujeres de la sociedad civil de Armenia, Nagorno Karabaj, Ucrania y norte del Cáucaso se reunieron en la capital armenia, Yereván, entre el 4 y 6 de junio en el marco de la tercera conferencia regional, organizada por la Iniciativa de Mujeres del Cáucaso para la Paz. Como en años anteriores, la delegación de mujeres de Azerbaiyán, que también estaba invitada, no pudo desplazarse hasta Yereván debido a los obstáculos para viajar a causa del conflicto no resuelto entre Armenia y Azerbaiyán. El objetivo del encuentro anual es la facilitación de una plataforma de mujeres en la que poder compartir aprendizajes, generar apoyo mutuo y empoderarse. Las participantes propusieron la creación de un Consejo de Mujeres desde el que impulsar la participación de las mujeres en los procesos de paz en la región. Las jornadas estuvieron estructuradas en torno a tres grandes ejes: “El mundo desde 2014: guerras, conflictos, terrorismo y paz frágil y sus impactos sobre las mujeres”; “el papel de las mujeres en el sector de seguridad: ¿mito o realidad?” e “implementación de la resolución 1325: de la adopción a la práctica.

En relación al proceso de paz entre **Georgia, Abjasia y Osetia del Sur**, se celebró la 32ª ronda de las conversaciones internacionales de Ginebra (30 de junio-1 de julio), en la que prevaleció un clima constructivo, si bien con claras diferencias entre las partes y sin avances significativos. El formato negociador mantuvo la estructura de dos grupos de trabajo, uno sobre cuestiones de seguridad y otro sobre aspectos humanitarios. En el primero se abordaron cuestiones relativas al no uso de la fuerza, continuándose los trabajos preparatorios para una declaración conjunta sobre el respecto. No obstante, se trata de un tema que genera divergencias crónicas entre Georgia, que aspira a que Rusia de pasos de reciprocidad a la declaración unilateral de 2010 por Georgia de compromiso de no usar la fuerza; y Rusia y las entidades independentistas, que defienden acuerdos bilaterales entre Georgia y esos dos territorios, argumentando que Rusia no es parte en conflicto. Según los co-facilitadores del proceso de diálogo (UE, OSCE, ONU), en la 32ª ronda el segundo grupo de trabajo debatió cuestiones como la lengua de enseñanza en los colegios del distrito de Gali –área de mayoría georgiana, ubicado dentro de Abjasia–, la libertad de movimiento, los casos de personas desaparecidas y cuestiones de patrimonio cultural y medioambiental. Los co-facilitadores especificaron que aunque el tema de la población desplazada y refugiada estuvo en la agenda de discusión, no hubo diálogo sustantivo sobre el mismo. Se trata de un tema que genera gran confrontación entre las partes, ante la negativa de Abjasia y Osetia de garantizar el derecho al retorno, y las acusaciones de sus gobiernos a Georgia sobre la politización del tema. Previamente a la ronda negociadora, los co-facilitadores mantuvieron consultas con las partes a mediados de junio. Por otra parte, se mantuvo activo el llamado Mecanismo de Prevención y Respuesta a Incidentes (IPRM, por sus siglas en inglés) entre representantes de Georgia y de Osetia del Sur, mientras que el mecanismo similar entre Georgia y Abjasia aún no se ha reactivado desde octubre de 2012, si bien continuaron las consultas sobre una posible reanudación.

Oriente Medio

En el caso de **Israel-Palestina**, el trimestre estuvo marcado por la confirmación de Benjamin Netanyahu como primer ministro israelí, después de lograr la mayoría en el parlamento (por un voto). Diversos análisis apuntaron que las perspectivas de negociación no eran auspiciosas

teniendo en cuenta que durante la campaña electoral Netanyahu aseguró que mientras él fuera primer ministro no habría Estado palestino. El presidente de EEUU también reconoció públicamente que la credibilidad de Israel para entablar negociaciones con los palestinos estaba mermada por un déficit de credibilidad por la falta de compromiso con la solución de dos Estados. La administración estadounidense ha insinuado que le será más difícil mantener la garantía de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU ante las resoluciones que cuestionan a Israel. La AP, por su parte, reiteró sus condiciones para restablecer los contactos, entre ellas la paralización de la construcción de asentamientos, la liberación de algunos prisioneros y la definición de un cronograma para las negociaciones y para el fin de la ocupación de los territorios palestinos.

A finales del trimestre, el Gobierno israelí rechazó una iniciativa de Francia para reactivar las negociaciones entre israelíes y palestinos, que incluye un calendario para el reconocimiento del Estado palestino. El plan implica la reanudación de conversaciones directas amparadas por una resolución de la ONU, por un plazo de entre 18 y 24 meses, con el acompañamiento de la UE y de países árabes. Si en el tiempo límite fijado no se consiguiera un acuerdo, la comunidad internacional podría reconocer a un Estado palestino. El ministro de Exteriores francés, Laurent Fabius, presentó la propuesta en Ramallah, mientras que Netanyahu advirtió que Israel no aceptaría ninguna imposición internacional ni fronteras que las fuerzas israelíes no sean capaces de defender. En este contexto, la AP mantuvo su estrategia de internacionalizar el conflicto y presentó por primera vez documentos ante la Corte Penal Internacional con antecedentes sobre abusos cometidos por Israel en Gaza, sobre los asentamientos y sobre el trato a prisioneros en cárceles israelíes. Durante el trimestre el presidente palestino, Mahmoud Abbas, también se reunió con el Papa Francisco y el Vaticano anunció su reconocimiento a Palestina como Estado. Paralelamente, cabe destacar que a lo largo del trimestre continuaron los rumores sobre contactos indirectos entre Israel y Hamas en Qatar para consensuar una tregua de larga duración, de unos cinco años, que permitiría la reconstrucción de Gaza. Según informaciones de prensa, estas gestiones contarían con la mediación de diplomáticos europeos.

En lo referente a **Siria**, en abril Rusia intentó facilitar los contactos entre el gobierno y la oposición, aunque sólo delegados de la disidencia de bajo perfil asistieron a la cita en Moscú, que no arrojó mayores resultados. El enviado especial de la ONU, en tanto, puso en marcha una serie de consultas con múltiples actores sirios. Staffan de Mistura invitó a Ginebra a integrantes de grupos de derechos humanos, organizaciones de mujeres, representantes del gobierno y de la oposición con el fin de identificar las diferentes posturas de cara a una negociación. El diplomático optó por celebrar contactos individuales y de bajo perfil, en contraste con el proceso conocido como Ginebra II que tuvo una gran visibilidad mediática pero no logró avances a principios de 2014. Aunque más de una treintena de grupos armados se negaron a participar, de Mistura continuó por esta vía y logró reunirse con una decena de delegados de milicias en Estambul, además de visitar a las autoridades en Damasco a mediados de junio y de ponerse en contacto con potencias regionales e internacionales para abordar la crisis siria. Según informaciones que trascendieron a la prensa, el enviado especial de la ONU pretende presentar un informe en julio en el que intentará concretar y operacionalizar los acuerdos alcanzados en 2012 el conocido como Comunicado de Ginebra, que trazó un plan para la transición en Siria.

En **Yemen**, ante la grave escalada de violencia y el deterioro del conflicto, el enviado especial de la ONU, Jamal Benomar, renunció en abril a su cargo después de más de cuatro años intentando facilitar una transición política en el país y en medio de críticas de países del Golfo. Fue sucedido por el diplomático mauritano Ould Cheikh Ahmed, quien a lo largo del trimestre intentó promover negociaciones entre las partes. Tras varias semanas de gestiones, el nuevo enviado especial consiguió que tanto representantes de los al-houhtistas como del gobierno del depuesto presidente Abdo Rabbo Mansour Hadi viajaran en junio a Ginebra para intentar una negociación. Las partes

descartaron mantener un diálogo directo e insistieron en una serie de condiciones para negociar. Por una parte, los delegados de Hadi exigieron que los al-houthistas reconozcan la autoridad del mandatario y se replieguen de las zonas que mantienen bajo control. Por otra parte, los al-houthistas descartaron un diálogo y una tregua sin que antes cesaran los ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudita. Así, los contactos acabaron sin resultados y el enviado especial para Yemen insistió en que cualquier nuevo intento de diálogo debía estar precedido de un cese el fuego. En este sentido, cabe destacar que durante el trimestre sólo se decretó una tregua humanitaria de cinco días, que tras cumplirse el plazo acordado derivó en una reanudación de las hostilidades. Cabe mencionar que Arabia Saudita también intentó promover un encuentro entre actores yemeníes con el presunto objetivo de abordar una salida política a la crisis, pero los al-houthistas se negaron a participar teniendo en cuenta que Riad lidera la coalición militar que viene lanzando ataques contra el grupo armado desde finales de marzo. Otra propuesta de cuatro puntos para abordar la crisis planteada por Irán –considerado aliado de los al-houthistas– tampoco tuvo mayor eco. Durante el período, informaciones de prensa también dieron cuenta de una reunión en Omán entre los al-houthistas y representantes de EEUU para abordar la crisis y negociar la liberación de ciudadanos estadounidenses que estaban retenidos por el grupo armado.